

La consulta plantea si resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 2.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en los supuestos en los que por parte de la consultante se traten los datos del representante de una determinada entidad apoderado para la firma de un contrato, incluyendo, según se indica, en todo caso, su Documento Nacional de Identidad y el cargo que el mismo pudiera ostentar en la sociedad representada.

Además, se indica que es posible la conservación en soporte no automatizado de copia del mencionado Documento Nacional de Identidad y de la escritura en cuya virtud se hubiera conferido al representante el poder en cuya virtud actuase, en la que pudieran figurar otros datos de los interesados, tales como su domicilio particular.

Al propio tiempo, se hace referencia al informe emitido por esta Agencia en relación con la aplicación del mencionado precepto, que se da por reproducido en el presente informe

El ya mencionado artículo 2.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “este Reglamento no será aplicable a los tratamientos de datos referidos a personas jurídicas, ni a los ficheros que se limiten a incorporar los datos de las personas físicas que presten sus servicios en aquéllas, consistentes únicamente en su nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax profesionales”.

Tal y como se indicaba en el informe citado en la consulta, la aplicación de la excepción contenida en el precepto exige la concurrencia de dos requisitos: el informe se refiere, por una parte, a la finalidad perseguida por el tratamiento que ha de limitarse a la relación entre el responsable del tratamiento y la empresa, de modo que la identificación de la persona de contacto resulte “accidental” para el cumplimiento de tal fin; es decir, que el objetivo perseguido sea realmente el tratamiento de datos de la propia empresa para el mantenimiento de las relaciones de quien trata el dato con la misma.

Sin necesidad de analizar este carácter “accidental” en el presente caso, el segundo de los requisitos enunciados en el informe se desprende de la lectura del propio precepto e implica que para que sea posible la aplicación de la excepción contenida en el mismo, el tratamiento deberá limitarse a los datos que el mismo cita taxativamente. El carácter taxativo de la enumeración se desprende del hecho de que el precepto, ya reproducido, prevé que la exclusión operará cuando el tratamiento se realice “únicamente” de los datos

mencionados, de forma que el tratamiento de cualquier dato adicional excedería del ámbito del precepto.

En este sentido, el informe ya citado señalaba que “(...) no se encontrarían excluidos de la Ley los ficheros en los que, por ejemplo, se incluyera el dato del documento nacional de identidad del sujeto, al no ser el mismo necesario para el mantenimiento del contacto empresarial. Igualmente, y por razones obvias, nunca podrá considerarse que se encuentran excluidos de la Ley Orgánica los ficheros del empresario respecto de su propio personal, en que la finalidad no será el mero contacto, sino el ejercicio de las potestades de organización y dirección que a aquél atribuyen las leyes”.

De este modo, en cuanto el tratamiento contenga el dato del documento nacional de identidad y no se limite a la especificación del cargo (que podría efectivamente ser el de “administrador único”, “consejero delegado” u otro análogo), dicho tratamiento excederá de la excepción prevista en el Reglamento.

Esta conclusión será aplicable al supuesto enunciado en la consulta, en el que además se hace referencia al posible tratamiento no automatizado de datos adicionales y vinculados además con la vida privada y familiar del afectado, lo que no hace sino reincidir en la conclusión de que será de aplicación al tratamiento lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 y en el propio Reglamento.

En segundo lugar, se plantea si las previsiones contenidas en el artículo 81.5 del Reglamento serán de aplicación en los dos supuestos contemplados en sus letras a) y b) o si ambos supuestos son acumulativos, de forma que es preciso que concurran ambos en el tratamiento para que no sean de aplicación las medidas de seguridad de nivel alto previstas en el Reglamento.

El citado artículo 81.5 dispone que “En caso de ficheros o tratamientos de datos de ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual bastará la implantación de las medidas de seguridad de nivel básico cuando:

- a) Los datos se utilicen con la única finalidad de realizar una transferencia dineraria a las entidades de las que los afectados sean asociados o miembros.
- b) Se trate de ficheros o tratamientos no automatizados en los que de forma incidental o accesorio se contengan aquellos datos sin guardar relación con su finalidad”.

Como puede comprobarse, el Reglamento no se refiere a dos requisitos que hayan de concurrir conjuntamente para que la excepción resulte aplicable al caso, sino que se refiere a dos concretos tratamientos, caracterizados por el



propio Reglamento en cuanto a su finalidad y sistema de tratamiento que generalmente se corresponderán con supuestos completamente diversos.

En consecuencia, la previsión establecida en el artículo 81.5 será aplicable en uno y otro supuesto, sin que el tratamiento deba necesariamente incluirse en ambos apartados.